

procedimiento reclamado del Gefe Superior de Hacienda de Zacatecas, se funda segun el mismo, en la prevencion de la circular de 24 de Mayo de este año y disposiciones conducentes que menciona: que esta circular no debe estimarse como el fundamento pretendido, por no estar comprendida en las disposiciones expresadas en el artículo 19 fracción 1ª letra D de la ley de presupuestos de 31 de Mayo tambien de este año, ley que por la materia sobre que versa, es la ley correspondiente al caso en cuestion: y por último, que supuesto el punto de direccion para el cual se ha pretendido conducir el dinero, es de ampararse éste con la guia competente, quedando en caso contrario expuesta la responsabilidad del conductor, segun las leyes respectivas, y que arreglan el contraresguardo. Por las consideraciones expuestas que demuestran la procedencia en derecho, de la demanda de amparo pedido, por cuanto á que no descansando en la ley el procedimiento del Gefe de Hacienda segun tiene alegado el quejoso, las garantías invocadas por éste se han violado como asegura; con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Primero: Se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas pronunciada á 19 de Setiembre próximo pasado en la cual declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon C. Ortiz contra la Gefatura de Hacienda del Estado que le negó las guias que pedia para conducir á Monterey la cantidad de quince mil quinientos sesenta y ocho pesos, veintidos centavos, por no haberse vulnerado, con la negativa, las garantías que protegen las artículos 4º, 16 y 38 de la Constitución general. Segundo: La Justicia de la Union ampara y protege al referido Ortiz, contra el procedimiento que ha designado en el presente recurso de amparo.

Devuélvansé las actuaciones al Juez de Distrito que las eleva á revision; acompañándole testimonio de esta sentencia para los

efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordáz.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico, México, Octubre 22 de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por los CC. Ildefonso y Abundio Hernandez y otros, contra el Ayuntamiento de Tenancingo por haber ocupado sin previa indemnizacion y con el objeto de abrir una calle, varias porciones de los terrenos que poseian en el pueblo de San Martin Coapastongo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 1º suplente.

El Promotor fiscal dice: que los CC. Ildefonso y Abundio Hernandez, Ramon y Sixto Gonzalez, Marcial y Cosme Millan, Gabino y Acencio Salazar, Pablo Embris, José Bernardino, Tranquilino Sotelo, Camilo Castro, Juan José y Canuto Blanquel, con fecha 29 de Mayo último, promovieron el juicio de amparo por expropiacion de unos terrenos, de los cuales dispuso el Ayuntamiento de Tenancingo para abrir una calle en el pueblo de San Martin Coapastongo, de donde son vecinos los quejosos. El Ayun-

tamiento responsable, en el informe que produjo con fecha 7 del corriente, dice: que en efecto, mandó abrir la calle; pero que los propietarios del terreno por donde se trazó, dieron su consentimiento reconociendo la utilidad que de ella resultaba á los vecinos del pueblo. Los quejosos han sostenido y probado en el juicio, que la providencia de la autoridad municipal fué violenta, negando el aserto de que hubiesen prestado su acuerdo para la apertura de la calle. En el término probatorio presentaron once títulos que acreditan la propiedad que tienen algunos de los que han seguido el juicio, y cuyos documentos fueron expedidos por la autoridad política de Tenancingo, en virtud de las atribuciones que la ley le confiere respecto de los bienes de comun repartimiento. Produjeron además la prueba testimonial, habiendo declarado diez testigos, que en el mes de Agosto del año próximo pasado una comisión del ayuntamiento de Tenancingo, procedió á la medición de los terrenos que debieron servir para abrir una calle en el pueblo ya citado, la que en efecto se abrió en el mes de Diciembre último. Que ese acto lo contradijeron los CC. Canuto Blanquel y Tranquilino Sotelo, como dueños en parte del terreno que debía ocuparse; finalmente, que los expropiados han ocurrido á las autoridades políticas y municipales de Tenancingo, en solicitud de que se les administrase justicia, y no han logrado el objeto. En los autos consta probado este hecho: que el ayuntamiento de la localidad de que se trata, sin consentimiento de los propietarios, ni indemnización alguna, ocupó la propiedad de los quejosos. El que responde cree, que la corporación responsable, para excusarse de la responsabilidad, ocupando los terrenos donde debió de abrirse la calle de que se ha hablado, estaba en la obligación, primero: de haber formado el expediente relativo en el cual se hiciera constar, que la causa pública exigía la ocupación. Segundo: que antes de proceder á la expropiación, debió proceder la indemnización

á los propietarios. En el presente caso pues, ni uno ni otro extremo se ve acreditado en el juicio, de donde se puede inferir, que la corporación municipal ocupante, violó las garantías que otorga la Constitución general en su artículo 27. En virtud de lo expuesto, y fundado en las constancias de los autos, el que suscribe, apoyado en el artículo constitucional citado y en la ley de 20 de Enero de 1869, pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Ildefonso y Abundio Hernandez, Ramon y Sixto Gonzalez, Marcial y Cosme Millan, Gabino y Ascencio Zalazar, Pablo Embris, José Bernardino, Tranquilino Sotelo, Camilo Castro, Juan José y Canuto Blanquel, contra la determinación del H. Ayuntamiento de Tenancingo que dispuso la apertura de una calle en el pueblo de San Martín Coapastongo ocupando terrenos de propiedad particular, sin sujetar su procedimiento á los preceptos constitucionales.—Toluca, Junio 27 de 1873.—Ceballos.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Julio 5 de 1873. Visto este juicio de protección y amparo, promovido por los CC. Ildefonso y Abundio Hernandez, Ramon y Sixto Gonzalez, Marcial y Cosme Millan, Gabino y Ascencio Zalazar, Pablo Embris, José Bernardino, Tranquilino Sotelo, Camilo Castro, Juan José y Canuto Blanquel, vecinos del pueblo de San Martín Coapastongo en la municipalidad del Distrito de Tenancingo, contra la providencia del H. Ayuntamiento de dicha municipalidad, que mandó abrir una calle atravesando los terrenos de la propiedad de los CC. referidos. Vistos: el ocurso presentado por los quejosos; el informe producido por el presidente del Ayuntamiento de Tenancingo, por acuerdo de esa corporación; los documentos acompañados á tal informe; las pruebas rendidas por los quejosos; el

alegato de estos; el pedimento del C. Promotor fiscal, la citacion para sentencia, con todo lo demas que debió verse y se tuvo presente.

Considerando: que el hecho de que se quejan los CC. al principio relacionados, está plenamente justificado, ya con la declaracion de diez testigos que en el término de prueba depusieron sobre el particular; ya tambien, con la confesion que en su informe hace el C. presidente municipal.

Considerando: que la violacion del artículo 27 de la Constitucion general de la República Mexicana, causada con la apertura de la calle que la corporacion de que se trata mandó efectuar por los terrenos de los quejosos, es tambien patente, ya porque antes de tal acto no se evacuaron los trámites correspondientes para que se declarase la utilidad y necesidad que exigiera la apertura de la dicha calle, ya porque la corporacion no era la autoridad competente para hacer la calificacion de utilidad y necesidad, y por último, porque aunque fuera de su competencia esa resolucion y se hubiera dado con los requisitos legales, no se amplió con la circunstancia esencialísima que presta el artículo 27 de nuestro pacto fundamental, esto es, con la previa indemnizacion que debe ser la solucion real y efectiva del valor de las partes de terreno que debian ocuparse para la calle que se pretendía abrir, y antes de esa ocupacion, previo el justiprecio de la parte de terreno, verificado por los peritos nombrados por la autoridad ocupante, y por los propietarios, y con tal motivo se atentó contra uno de los derechos del hombre que se considera tan sagrado, y que debe respetarse no solo por cada individuo, sino aun por las autoridades que presiden la sociedad.

Considerando: que aunque el H. Ayuntamiento se exculpa diciendo, que los quejosos prestaron su consentimiento; que la calle se abrió á solicitud de ellos y que poseen los terrenos sin título legal, estos asertos estan destruidos, primero: con la infor-

macion testimonial de diez testigos que en este juicio han declarado de una manera uniforme, asegurando la resistencia y oposicion que los quejosos hicieron á todos los actos del Ayuntamiento, relativos á la apertura de la calle; segundo: con el documento de fojas 3 de estos autos, y las diversas gestiones que segun aparece han hecho; tercero: con los 14 títulos que han presentado los quejosos extendidos por la Gefatura política del Distrito de Tenancingo, en que aparece que se les adjudicaron esos terrenos, y cuyos títulos les aseguran la propiedad y el dominio en aquellos, conforme á la suprema circular de 9 de Octubre de 1856 y sus concordantes; y por último, con la circunstancia de que el H. Ayuntamiento, ya en su informe como en el documento de fojas 12, considera á los quejosos en posesion de los terrenos por los que se abrió la calle de que se trata, y tal posesion argulle la propiedad, mientras no se demuestre lo contrario.

Considerando: que aunque el H. Ayuntamiento para cincerar su conducta, acompañó á su informe el citado documento de fojas 12, que contiene las declaraciones de unos testigos para justificar la aquiescencia de los quejosos en la apertura de la calle y la necesidad que habia de ella; sin embargo, no es de considerarse con mérito esa informacion, primero: porque fué recibida ante el mismo presidente municipal de la corporacion responsable; segundo, porque segun aparece, uno de los testigos formó parte de la comision; otros no declaran de ciencia cierta, sino exponen que así lo creen; y respecto al primero, quedando aislado su dicho, es de ninguna fuerza su declaracion, y tercero; que estos dichos quedan contrariados con los 10 testigos que con los requisitos legales depusieron en este juicio: y considerando, por último: que aunque en la junta tenida ante el C. jefe político de Tenancingo, se trató de hacer proposiciones sobre la indemnizacion del precio de los terrenos ocupados, sin embargo, de esta no aparece que se haya

efectuado y además debe ser previo, según el precepto constitucional, y no sujetarse á condiciones en que los quejosos sufrieran demoras y perjuicios, como vendría á suceder si no se otorgara el remedio que se solicita; y atendiendo á que los perjuicios que los solicitantes han resentido á consecuencia de la apertura de la calle, es materia de otro juicio que no está sujeta á las atribuciones de la autoridad federal; por tales consideraciones y con fundamento de los artículos primero fracción primera y 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, 27, 101 y 102, de la Constitución general de la República, en nombre de los Supremos Poderes de la Unión, re resuelve: Primero: que la Justicia federal ampara y protege á los CC. Ildefonso y Abundo Hernandez y demás quejosos, con el acuerdo del H. Ayuntamiento de la municipalidad de Tenancingo, que mandó abrir una calle atravesando por los terrenos de los referidos quejosos, debiendo volver al estado que tenían antes de la apertura de la calle. Segundo: por lo que hace á la reclamación de daños y perjuicios, se dejan á los solicitantes sus derechos á salvo para que los deduzcan ante quien corresponda y cuando les convenga, y Tercero: sacadas las copias respectivas para que se publique esta sentencia en los periódicos de costumbre y Semanario Judicial, remítase esta sentencia á la Suprema Corte de Justicia, para su revisión, haciéndose saber á quienes corresponda. Así definitivamente juzgando, en primera instancia, lo sentenció y firmó el C. Lic. Petronilo Cano, Juez primero suplente de Distrito en el Estado de México. Doy fé.—*Petronilo Cano.*—*Francisco del Valle.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Octubre 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de México per Ildefonso y Abundo Hernandez, Ramon y Sixto Gonzalez,

Manuel y Cosme Millan, Gabino y Acencio Salazar, Pablo Embris, José Bernardino, Tranquilino Sotelo, Juan José, Camilo Castro, y Canuto Blanquel contra el Ayuntamiento de Tenancingo, por haber ocupado sin previa indemnización y con el objeto de abrir una calle, varias porciones de los terrenos que poseen en el pueblo de San Martin Coapastongo, con violación de la garantía que consigna el artículo 27 de la Constitución federal, por lo que piden se repongan las cosas al estado que antes guardaban, y se condene al Ayuntamiento en los daños y perjuicios que les ha causado con dicha providencia; y considerando: que por los mismos justificantes presentados por la autoridad responsable del acto reclamado, en confirmación de su aserto de que los quejosos solicitaban la apertura de la calle y al efecto cedieron los terrenos que fueron necesarios, aparece que no se hizo constar en la forma debida y de una manera explícita y terminante la cesión de dichos terrenos por sus legítimos dueños, y que por otra parte, las vagas presunciones que resultan de esas pruebas quedan destruidas por las declaraciones de diez testigos que afirman uniformemente haberse opuesto los quejosos á dicha apertura. Que aun en el supuesto de que los promoventes no tuvieran debidamente registrados los títulos de propiedad de los terrenos en cuestión, bastaba que estuvieran en quieta y pacífica posesión de ellos, como lo ha reconocido el Ayuntamiento, para que esta autoridad careciera de la facultad para perturbarlos en esa posesión. Que no corresponde á la naturaleza de este juicio decidir en él sobre los perjuicios que puedan haber sufrido los quejosos con la apertura de la calle.

Con fundamento de los artículos 27 y 101 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 5 de Julio del presente año por el Juez de Distrito, que declara: primero; que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Ildefonso y

Abundio Hernandez y demas quejosos, contra el acuerdo del H. Ayuntamiento de la municipalidad de Tenancingo que mandó abrir una calle atravesando por los terrenos de los referidos quejosos; debiendo volver al estado que tenían antes de la apertura de la calle; segundo: por lo que hace á la reclamacion de daños y perjuicios, se dejan á los solicitantes sus derechos á salvo para que los deduzcan ante quien corresponda y cuando les convenga.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Manuel de Custañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Závala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

Escopia que certifico. México, Noviembre 29 de 1873.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por D. Manuel Oliver, en representación de Don Leon Duplan y D. Ricardo H. Leetch, contra la sentencia pronunciada por el Juez primero de Paz de Minatitlan, por la que se les obliga á pagar por la madera que habian embarcado para su exportacion, el derecho municipal de doce y medio centavos por tonelada.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Leon Duplan y D. Ricardo H. Leetch, vecinos

y del comercio de Minatitlan, han promovido por medio de su apoderado, este juicio de amparo y proteccion contra las sentencias definitivas pronunciadas por el C. Juez primero de paz y C. Juez de primera instancia, en el juicio verbal establecido contra ellos en cobro de pesos por derechos municipales causados sobre las maderas cortadas en el municipio, y que fueron introducidas en la cabecera para ser embarcadas fuera de la República, fundándose en que el Estado no puede imponer derechos de exportacion á los frutos del país, y que por lo tanto está comprendido el caso en la fraccion tercera del artículo 101 de la Constitucion federal, á cuyo efecto acompañó dicho apoderado las constancias relativas al presente juicio.

Pedido el informe correspondiente á la autoridad ejecutora del acto reclamado, lo emitió manifestando, que el derecho contra el cual se quejan los promoventes, no es de exportacion prohibido por la fraccion primera del artículo 112 de la Constitucion federal, sino impuesto con arreglo á las bases de las haciendas municipales sobre los productos de los predios rústicos, siendo uno de tantos las maderas que se cortan para llevar al mercado de Minatitlan; y que si bien se paga ese impuesto por el comerciante que la embarca para evitar los fraudes que pudieran cometerse de otra manera, esta circunstancia no varía la naturaleza y objeto de la contribucion, pues en el mismo caso se encuentra el arroz, la panela, el aguardiente y cualesquiera otros frutos que se introducen en las poblaciones para su venta, y despues de ella es indiferente que se consuman ó se exporten segun le convenga al propietario.

Al examinar los fundamentos del ocuso con los datos presentados en este juicio y los que sirven de apoyo á las sentencias referidas, encuentra el infrascrito la superior autorizacion del ejecutivo del Estado de 22 de Abril de 1871 en que concedió al H. Ayuntamiento de Minatitlan que pudiera